EXPEDIENTE No: ****
QUEJOSO: N1
RESOLUCIÓN: RECOMENDACIÓN No.
14/2011
AUTORIDAD
DESTINATARIA: PROCURADURÍA
GENERAL DE
JUSTICIA DEL ESTADO
DE SINALOA

Culiacán Rosales, Sin., a 28 de marzo de 2011

**LIC. MARCO ANTONIO HIGUERA GÓMEZ,
PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA
DEL ESTADO DE SINALOA.**

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa (CEDH), con fundamento en lo dispuesto en los artículos 102, apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º; 2º; 3º; 4º Bis y 77 Bis de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 1º; 7º, fracción III; 16, fracción IX; 57 y 59 de la Ley Orgánica de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Sinaloa, así como 1º; 4º; 77; 94; 95 y 96 de su Reglamento Interior, ha examinado los elementos contenidos en el expediente ****, relacionados con el caso del señor N1 y vistos los siguientes:

I. HECHOS

A. El 21 de agosto de 2009, esta Comisión Estatal de los Derechos Humanos recibió escrito de queja signado por el señor N1, mediante el cual hizo valer presuntas transgresiones a derechos humanos cometidos en su agravio y anexó diversas documentales en copia simple, así como notas periodísticas que narran el accidente.

Por medio de dicho escrito, el agraviado manifestó ser médico y laborar para el H. Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa, en el área de servicios médicos municipales, adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, y que con motivo de sus funciones participa activamente en el operativo cero tolerancia que desarrolla el referido Ayuntamiento, aplicando el alcoholímetro a los automovilistas que circulan por el punto en el que se encuentren instalados y que el personal de tránsito interrumpe la circulación, lo anterior a fin de verificar si éstos se encuentran conduciendo en estado de ebriedad.

Que con fecha 4 de mayo de 2009 aproximadamente a las 02:00 a.m., al encontrarse en aplicación del operativo ya referido junto con agentes de tránsito por la Avenida ****, entre las calles **** y calle ***** de la colonia ***** de ****, Sinaloa, precisamente a la altura del *****, fue atropellado por un automovilista el cual fue detenido en flagrancia por tales hechos.

La persona detenida dijo llamarse N2, quien presuntamente conducía su vehículo en estado de ebriedad.

De tales hechos el agraviado resultó con lesiones de fracturas, luxaciones y hemorragias.

A raíz de los hechos señalados el señor N2, fue detenido y puesto a disposición de la Agencia Tercera del Ministerio Público del fuero común de Mazatlán, Sinaloa, siendo éste quien resolvió su situación jurídica, interponiendo el agraviado en su momento la querrela correspondiente por las lesiones sufridas en su composición corporal, por lo que se ejerció acción penal en contra del sujeto activo del delito.

Por otro lado, refirió el agraviado que el 19 de agosto de 2009 se trasladó al Juzgado Cuarto del Ramo Penal de Mazatlán, para verificar la situación que guardaba su proceso y para determinar lo concerniente a la reparación del daño a que tiene derecho.

No obstante lo anterior, se encontró con la sorpresa de que a su agresor se le había dictado AUTO DE LIBERTAD POR FALTA DE ELEMENTOS PARA PROCESAR, en virtud de que el agente integrador fue omiso en aportar los medios de convicción necesarios para acreditar los elementos del delito de lesiones y daños, presentando la averiguación “serias deficiencias” -según lo narrado por el propio quejoso en su escrito- y que debido a eso, no pudo reclamar la reparación del daño ocasionado en su patrimonio y en su integridad física.

B. Para la debida integración del expediente de queja, se solicitó información al Agente Tercero del Ministerio Público del fuero común con competencia en Mazatlán, Sinaloa y a otras autoridades que intervinieron en el caso, los cuales remitieron diversas constancias relacionadas con los hechos que se investigan.

II. EVIDENCIAS

En el presente caso las constituyen:

1. El escrito de queja presentado ante la Visitaduría Regional Zona Sur de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa, por el señor N1 el 21 de agosto de 2009 en contra de servidores públicos adscritos a la Agencia Tercera del Ministerio Público del fuero común de Mazatlán, Sinaloa, anexando a su escrito los siguientes documentos:

a. Copia simple del parte de accidente con folio 21397, emitido por personal de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal del H. Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa.

b. Copia simple del certificado médico practicado al quejoso, por parte de un facultativo adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal del H. Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa.

c. Copia simple del certificado médico practicado a N2, por parte de un facultativo adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal del H. Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa.

d. Recortes de 2 notas periodísticas, publicadas en el periódico Noroeste en fecha 11 de Mayo de 2009.

2. Acta circunstanciada de fecha 24 de agosto de 2009, mediante la cual personal de este organismo hizo constar que realizó llamada telefónica al número proporcionado por el quejoso en su escrito de queja, entablando comunicación con el mismo, a quien se le comunicó el inicio de la queja correspondiente.

3. Con fecha 24 de agosto de 2009, se envió el oficio número ****, mediante el cual se solicitó al licenciado N3, titular de la Agencia Tercera del Ministerio Público del fuero común de Mazatlán, Sinaloa, el informe de ley respecto los actos que reclama el quejoso.

4. Con fecha 15 de septiembre de 2009, se envió oficio número ****, mediante el cual se requirió al licenciado N3, Agente Tercero del Ministerio Público del fuero común de Mazatlán, Sinaloa, la contestación del informe previamente solicitado.

5. Con fecha 23 de septiembre de 2009, este organismo recibió el oficio número ****, mediante el cual el licenciado N3, titular de la Agencia Tercera del Ministerio Público del fuero común de Mazatlán, Sinaloa, rindió el informe que le fue solicitado, por el que hizo del conocimiento a este organismo que con motivo de los hechos denunciados se inició la averiguación previa número *****, a cargo del licenciado N4, agente del Ministerio Público

auxiliar y que después del desahogo de múltiples diligencias, resolvió el ejercicio de la acción penal en contra del sujeto activo del delito.

6. Con fecha 7 de octubre de 2009, se envió el oficio número ****, mediante el cual se solicitó al licenciado N5, Juez Cuarto de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa, que en vía de colaboración remitiera copias certificadas del proceso penal derivado de la consignación de la averiguación previa relacionada con los hechos de los que se duele el quejoso.

7. Con fecha 29 de octubre de 2009, este organismo recibió el oficio número ****, mediante el cual el Juez Cuarto de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa, remitió copia certificada de la causa penal número ***** relacionada con los presentes hechos.

III. SITUACIÓN JURÍDICA

Que con fecha 10 de mayo de 2009, el hoy quejoso N1, se encontraba realizando sus labores en el operativo denominado “cero tolerancia” como médico adscrito de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Mazatlán, Sinaloa, cuando fue atropellado.

Con motivo de lo anterior, el conductor del vehículo que lo atropelló fue detenido en flagrancia y puesto a disposición de la agencia Tercera del Ministerio Público del fuero común de Mazatlán, quien inició la averiguación previa número ****, la cual se instruyó en contra de N2 y que en fecha 26 de mayo de 2009 resolvió la misma, ejercitando acción penal en contra del antes mencionado por los delitos de lesiones a título de culposo y contra la seguridad del tránsito de vehículos, tocando conocer de los hechos al Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Ramo Penal con sede en Mazatlán, Sinaloa.

No obstante lo anterior, el juez de la causa dictó auto de libertad por falta de elementos para procesar a favor de N2, por la probable comisión del delito de lesiones a título culposo y auto de no sujeción a proceso por el delito contra la seguridad de tránsito de vehículos, ya que según lo argumentado en la resolución de fecha 4 de agosto de 2009, tal acusación no se sustentó, ya que la misma no fue debidamente fundada con bases firmes por el Ministerio Público, en virtud de que éste omitió acreditar que el inculcado se encontraba en condición de embriaguez.

Algunos de los argumentos expuestos por el Juez y que revelan la actuación omisa e irregular del licenciado N3, titular de la Agencia Tercera del Ministerio Público del fuero común de Mazatlán, Sinaloa, se expresan a continuación:

“ - - CUERPO DEL DELITO CONTRA LA SEGURIDAD DEL TRANSITO
VEHICULAR.-----

III.- El segundo de los elementos del delito CONTRA LA SEGURIDAD DEL TRÁNSITO DE VEHÍCULOS, que ocupa nuestra atención, requiere de un presupuesto de la conducta, consistente en que el sujeto activo se halle en estado de ebriedad, lo que en este caso no se encuentra plenamente acreditado, lo anterior se estima así, ya que si bien es cierto, que en autos obra el dictamen médico espirométrico elaborado por el doctor M1, en el que certificó que al examinar al acusado N2, lo encontró con aliento alcohólico en primer grado de ebriedad, sin embargo, también es cierto, que para la determinación del estado de ebriedad de una persona, el médico que lo revise debe de razonar las técnicas aplicadas por las que arribó a la conclusión en el certificado médico correspondiente de que el sujeto activo presenta algún grado de ebriedad y de esa manera, tal documento puede ilustrar al Juzgador y crearle la convicción plena de que en realidad el conductor del vehículo que transitaba por una de las avenidas de esta ciudad, si se encontraba disminuido de sus facultades de reacción ante cualquier imprevisto que le pudiera surgir cuando transitaba por las vía terrestre, por estar alcoholizado, es decir, dicho doctor debe evidenciar en su dictamen que practicó todas las operaciones y experimentos que su ciencia le sugiera para finalmente expresar los hechos y circunstancias que le sirvieron de sustento para emitir su peritaje, habida cuenta de que en el caso a estudio, de la simple lectura del dictamen médico practicado por el doctor M1 al acusado N2, y que obra visible a foja 9 de lo actuado, se advierte que únicamente se concretó a emitir datos ya que al examinarlo únicamente se concretó a decir que el activo presenta: desinhibición negativa; tendencia a discutir negativa; labilidad afectiva negativa, agresividad negativa; deterioro de la atención positiva; juicio alterado positivo; nivel de conciencia disminuido; interferencia con el funcionamiento personal positivo; aliento etílico positivo; pupilas con respuesta a reflejos luminosos disminuida; inyección conjuntal positiva; lenguaje verborreico; reflejos osteotendinosos con respuesta a estímulos físicos disminuidos; romberg positivo; marcha tambaleante y enrojecimiento facial positivo.

Empero, no existe en dicho dictamen evidencia alguna de que el perito haya practicado las operaciones y experimentos que su ciencia o arte le sugirieron, ni expresados los hechos y circunstancias que sirvan de fundamento a su opinión, ni siquiera una explicación técnica o razonamiento lógico alguno, que le haya servido para concluir de la manera en que lo hizo, por lo que, ante tales omisiones al no reunir el dictamen de cuenta, los requisitos exigidos en el numeral 237 del Código de

Procedimientos Penales, debe significarse, que dicha opinión pericial carece de eficacia demostrativa, con lo que disponen los artículos 319 y 326 del ordenamiento adjetivo en consulta, para acreditar el estado de ebriedad que se atribuye a N2, por las razones que han quedado expresadas.”

- - - CUERPO DEL DELITO DE LESIONES-----

- - - IV. Luego entonces de los medios de prueba que arroja la averiguación, se estiman acreditados los elementos integrantes del cuerpo del delito de lesiones, en términos de lo que establecen los artículos 135 y 136 fracción II del Código Penal en vigor, con relación en el artículo 170 del Código Procesal de la materia, pues es evidente que el día 10 diez de mayo del año 2009 dos mil nueve aproximadamente a las 02:00 horas por la calle **** y calle **** de esta ciudad, una persona física en este caso N2, tripulaba un vehículo automotor de la marca ****, tipo ****, modelo ****, color **** línea ****, y al circular por las citadas calles, impactó al ofendido de nombre N1, quien se encontraba en las mencionadas ruas, para efecto de llevar a cabo un operativo y a causa del impacto se causó diversas lesiones en su humanidad y para constatarlo emerge a foja 3 vuelta la fe ministerial de las mismas en las que el personal de actuaciones de la Representación Social precisa que el ofendido presenta herida cortante en región parietal derecha de 2 centímetros aproximadamente, excoriación en cara posterior de 0.5 x 1 centímetro en rodilla izquierda, excoriación en cara inferior en rodilla derecha de 6 centímetros y ambos ojos derecho e izquierdo hinchados de color morado y múltiples excoriaciones en nariz, boca y mejilla derecha y presenta un collarín en su cuello, de color blanco, manifestando el ofendido sentir dolor en su cuello y columna.

En apoyo a lo anterior se cuenta con el dictamen médico legal de lesiones que obra visible a foja 23 de esta causa que emiten los doctores M2 y M3 quienes concluyen que las lesiones que presenta N1, son lesiones que por su naturaleza y localización no le ponen en peligro la vida, por la vascularidad de las zonas afectadas son de las que tardan en sanar más de 15 días, tiempo necesario para que el tejido tendinoso muscular afectado se regenere y habitualmente no dejan consecuencias.

Con tales medios de prueba se viene acreditar la existencia de las lesiones que presentó en su momento el ofendido a raíz del golpe que recibió, por tal razón a éstas se les otorga un valor pleno de conformidad a lo que indican los artículos 319 y 320 del Código de Procedimientos Penales en vigor, puesto que en su desahogo se acataron las directrices procesales establecidas en los artículos 140, 141, 156, 224 y relativos del Código de Procedimientos Penales en vigor, puesto que con ellas se advierte la lesión

al bien jurídico tutelado por la norma y que lo es la salud personal de los individuos, por lo tanto se tiene por demostrado el cuerpo del ilícito en cita.
PROBABLE RESPONSABILIDAD PENAL.

VI. De los datos probatorios que arroja la causa se advierte que de ninguna manera logra demostrarse la misma, que si bien es cierto el fiscal consignados asegura que se acredita la participación de N2, en el evento que le atribuye ya que argumenta que con fecha 10 diez de Mayo del año 2009 dos mil nueve, aproximadamente a las 2:00 horas, por la calle **** y calle **** de esta ciudad, el activo tripulaba una unidad automotor marca ****, tipo ****, modelo **** color **** línea **** y que lo hacía infringiendo un deber de cuidado y a consecuencia de ello impactó al pasivo de nombre N1, teniendo como resultado las lesiones en su humanidad.

Argumento este que dice el agente social que se ve demostrado con el dicho de la víctima y del testigo L1, quienes refieren que el hoy acusado fue la persona que tripulaba la unidad de la línea cavalier, y que impactó al pasivo causándole lesiones, además dicen que éste venía en estado de ebriedad, a lo anterior se suma el parte de accidente que fue elaborado por el agente de Tránsito Municipal de nombre L2, quien refiere que el activo al tripular la unidad automotor se dormitó a consecuencia de venir en estado de ebriedad.

Así también el fiscal consignador asegura que este infringió un deber de ciudadano, misma que fue determinante para que aconteciera el evento delictuoso, pues indica que este violentó el artículo 88 de la Ley de Tránsito y Transporte del Estado de Sinaloa.

No obstante la apreciación del agente social, este juzgador no coincide con la misma, ya que o hay que perder de vista que el numeral invocado requiere que el chofer de la unidad se encuentre en estado de ebriedad y que a consecuencia de ello disminuya en forma notable su aptitud para conducir lo que en el caso concreto de ninguna manera logra demostrarse. Paya mayor ilustración resulta conveniente señalar el numeral en cita para demostrar lo antes invocado, el cual a la letra dice: *“Queda prohibido a toda persona conducir un vehículo en estado de ebriedad o bajo la influencia de cualquier droga o substancia tóxica que disminuya en forma notable su aptitud para conducir, aún cuando por prescripción médica esté autorizado para su uso.”*

Por otro lado, el representante social adscrito al Juzgado de la causa, a pesar de que presentó recurso de apelación en contra de la citada resolución manifestó

que no encontró agravios que hacer valer para combatir la resolución apelada, por lo que dicho recurso se declaró desierto.

Lo anterior negó toda posibilidad al agraviado N1, en su carácter de víctima del delito, de obtener la reparación a los daños que le fueron causados.

IV. OBSERVACIONES

Una vez realizado el análisis de las constancias y evidencias que integran el expediente que ahora se resuelve, esta Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa pudo acreditar actos violatorios a derechos humanos como lo es el derecho a la seguridad jurídica en materia de procuración de justicia con motivo de la omisión del licenciado N3 y N4, titular y auxiliar respectivamente de la Agencia Tercera del Ministerio Público del fuero común de Mazatlán, Sinaloa, de practicar las diligencias necesarias para acreditar la probable responsabilidad del inculpado, así como por omitir tomar las medidas correspondientes para garantizar la reparación del daño a favor de las víctimas u ofendidos del delito por parte del licenciado N6, agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Ramo Penal de Mazatlán, lo cual derivó en violación al derecho humano a la legalidad con motivo de la prestación indebida del servicio público.

DERECHO HUMANO VIOLENTADO: Seguridad jurídica

HECHO VIOLATORIO ACREDITADO: Integrar la averiguación previa de manera irregular o deficiente derivado de la abstención de practicar diligencias para acreditar la probable responsabilidad del inculpado, así como la reparación del daño (Irregular integración de la averiguación previa).

Esta conclusión se corrobora en virtud de que no obstante que para la comprobación de los elementos del tipo penal contra la seguridad y tránsito de vehículos, por el cual el representante social ejerció acción penal, se requería acreditar fehacientemente que al momento de cometer el ilícito, el sujeto activo -conductor de vehículo- se encontraba en estado de ebriedad o bajo el influjo de sustancias que impedían o perturbaban la adecuada conducción.

Sin embargo, para acreditar dicha circunstancia el representante social únicamente se limitó a tomar en cuenta un examen médico conocido como “examen espirométrico al alcohol”, mismo que fue practicado al sujeto activo por un facultativo adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública del H. Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa, y que fue acompañado junto con otros documentos como anexo al oficio mediante el cual el sujeto activo del delito fue puesto a disposición.

Con marcada claridad se advierte que dicho examen por sí mismo, no reúne los requisitos y formalidades exigidos por el Código Procesal Penal estatal para ser considerado un peritaje; sino más bien, constituye una diligencia practicada de manera espontánea por parte de la dependencia a cuyo cargo corrió la detención del sujeto activo, el cual si bien es cierto puede constituir un indicio, no fue tomado como base y única prueba para acreditar las condiciones físicas y fisiológicas en que el sujeto activo del delito se encontraba al momento de cometer el ilícito.

Al respecto, conviene precisar lo establecido por los artículos 224, 225, 233, 237 y 239 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa:

“Artículo 224. Siempre que para el examen de alguna persona o de algún objeto se requieran conocimientos especiales, se procederá con intervención de peritos.

Artículo 225. Por regla general, los peritos que examinen deberán ser dos o más, bastará uno cuando sólo éste pueda ser habido o cuando haya peligro en el retardo.

Artículo 233. Los peritos deberán tener título oficial en la ciencia o arte a que se refiere el punto sobre el cual deba dictaminarse, si la profesión o arte están legalmente reglamentadas; en caso contrario se nombrarán peritos prácticos.

Artículo 237. Los peritos practicarán todas las operaciones y experimentos que su ciencia o arte les sugiere y expresarán los hechos y circunstancias que sirva de fundamento a su dictamen.

Artículo 239. Los peritos emitirán su dictamen por escrito y lo ratificarán en diligencia especial.

Los peritos oficiales no necesitarán ratificar sus dictámenes, sino cuando el funcionamiento que practique las diligencias lo estime necesario.

Los peritos institucionales ratificarán el dictamen y responderán a las preguntas que se formulen a través del oficio, previo requerimiento del juez de la misma forma.”

Al respecto y conforme a las disposiciones antes transcritas, se establece una obligación explícita para la debida procuración de justicia, en el sentido de que siempre se deberá proceder con intervención de peritos cuando para el examen

de alguna persona se requieran conocimientos especiales; en el caso que nos ocupa, el representante social fue omiso en observar dicho lineamiento, toda vez que no ordenó la intervención de peritos para que éstos procedieran a examinar al sujeto activo y determinaran si éste se encontraba en estado de ebriedad o no, al momento de cometer los ilícitos que se le imputaban, aún cuando por la naturaleza de los delitos imputados, resultaba estrictamente necesario acreditar dicha circunstancia.

Si bien es cierto que para acreditar el estado de ebriedad del sujeto activo el representante social tomó en cuenta como único elemento de prueba el examen médico conocido como “examen espirométrico al alcohol”, éste debió advertir que dicho examen había sido suscrito por un solo individuo, en el que además no se expresaban las operaciones y experimentos llevados a cabo por el suscribiente y que presumiblemente la ciencia o arte sugerían realizar a éste; debió advertir además que en el mencionado examen no se expresaban los hechos y circunstancias que sirvieron de fundamento al emisor para arribar a la conclusión planteada.

No obstante lo anterior, el representante social tampoco realizó las acciones conducentes a fin de que dicho examen subsanara las deficiencias presentes y reuniera los requisitos exigidos por el código procedimental aplicable, toda vez que tampoco llamó a comparecer al suscribiente a fin de que aceptara y protestara el cargo de perito; menos lo citó a que ratificara su escrito como tampoco comprobó que éste tuviere título oficial en la materia o en su caso nombrarlo perito práctico.

DERECHO HUMANO VIOLENTADO: Seguridad jurídica y derecho a la procuración de justicia.

HECHO VIOLATORIO ACREDITADO: Omitir tomar las medidas correspondientes para garantizar la reparación del daño a favor de las víctimas u ofendidos del delito.

El licenciado N6, agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Ramo Penal de Mazatlán, Sinaloa, también incumplió con sus obligaciones como representante social del ahora quejoso, ya que de las constancias que obran integradas en el expediente se puede apreciar que el mismo presentó un recurso de apelación a beneficio del quejoso, en el cual en ningún momento presentó agravios para hacer valer de manera fundada y motivada en contra del auto de libertad por falta de elementos para procesar por el delito de lesiones a título culposo, consecuentemente declarándose desierto dicho recurso interpuesto por el representante social.

Es decir, dicho representante social en ningún momento representó de manera legal al ahora quejoso, ya que en su escrito en el cual presentó al recurso de apelación, se limitó a señalar que presentaba dicho recurso en un solo párrafo, sin argumentar o señalar los agravios que le causó al ofendido el auto de libertad por falta de elementos para procesar al inculpado.

Lo anterior, particularmente en razón de que si bien es cierto el estado de ebriedad del mismo no quedó acreditado ante la falta de un dictamen médico que cumpliera con los requisitos necesarios para que el juez de la causa le concediera valor probatorio, también lo es que el cuerpo del delito de lesiones que sufrió el señor N1 si quedó debidamente acreditado con la fe ministerial de lesiones practicada por el agente Tercero del Ministerio Público del fuero común de Mazatlán y con el dictamen médico que emitieron los peritos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa.

Lo anterior, impidió al quejoso N1 hasta ese momento, reclamar la reparación del daño ocasionada a su integridad física, y con ello a su patrimonio, a la que consideraba tener derecho, toda vez que tampoco existe constancia de que la institución del Ministerio Público con otros datos procediera en contra del inculpado.

DERECHO HUMANO VIOLENTADO: Derecho a la legalidad

HECHO VIOLATORIO ACREDITADO: Prestación indebida del servicio público

En términos de todo lo anterior, se acredita el incumplimiento debido a sus tareas y la consecuente responsabilidad de los funcionarios públicos encargados de la integración del expediente de averiguación previa, los cuales cometieron la irregularidad de no ordenar la práctica de las diligencias necesarias para la comprobación de los elementos del tipo penal y la probable responsabilidad, causando agravios a las personas cuya representación correspondió a éstos, por lo que sus conductas violentan lo que dispone la Ley Orgánica del Ministerio Público del Fuero Común, en sus artículos 4º; 6º, fracción IV; 9º, fracción IV y 59, inciso e), que expresamente señalan:

“Artículo 4. La función del Ministerio Público se regirá por los principios de unidad de actuación, legalidad, protección social, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto de los derechos humanos.
.....

Artículo 6o. La institución del Ministerio Público tendrá las atribuciones siguientes:
.....

IV. Investigar y perseguir los delitos del orden común.

.....

Artículo 90. La investigación y persecución de los delitos del orden común comprende:

.....

IV. Practicar las diligencias necesarias para la acreditación del cuerpo del delito y la probable responsabilidad, así como para la reparación del daño y perjuicios causados.

.....

Artículo 59. Son facultades y obligaciones de los Agentes del Ministerio Público, las siguientes:

.....

e) Practicar las investigaciones necesarias para el esclarecimiento de los hechos, que tiendan a acreditar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad de los indiciados.

.....”

De igual forma los funcionarios públicos referidos transgredieron lo dispuesto por las siguientes disposiciones:

El primer párrafo del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice lo siguiente:

“Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función.”

Los numerales 2º y 3º del Código de Procedimientos Penales vigentes en el Estado, que se transcriben a continuación:

“Artículo 2. Es facultad exclusiva del Ministerio Público, la persecución de los delitos y el ejercicio de la acción penal ante los tribunales.

Artículo 3. El Ministerio Público, en ejercicio de su actividad persecutoria y de preparación para el ejercicio de la acción penal, deberá:

I. Recibir denuncias o querellas; las denuncias podrán también formularse ante la Policía Ministerial, que en todo caso estará a las órdenes del Ministerio Público.

II. Practicar y Ordenar la realización de todas las diligencias necesarias para esclarecer la totalidad del hecho, y en su caso, acreditar del cuerpo del delito y la probable responsabilidad, así como la reparación del daño.

III. Solicitar las órdenes de comparecencia para preparatoria y las de aprehensión, que sean procedentes;

IV. Pedir el aseguramiento precautorio de bienes para los efectos de la reparación del daño; y

V. Proceder, sin esperar orden judicial, a la detención de los responsables en flagrante delito o en caso de notoria urgencia cuando no haya en el lugar la autoridad judicial, observándose lo previsto en los artículos 117, 118 y 119.

.....”

De igual forma lo determinado en la circular 03/97 de la Procuraduría General de Justicia del Estado, que en su numeral primero, establece:

“Se instruye al personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa, para que en el ejercicio de las funciones de su competencia, observe y aplique los siguientes:

Lineamientos básicos:

I. Constreñir sus actos a los preceptos constitucionales y legales que rigen la función del Ministerio Público.

.....”

Los servidores públicos de referencia, infringieron además su deber impuesto por la ley reglamentaria como representantes sociales de representar precisamente los intereses y derechos de la víctima del delito, en este caso lo es el hoy quejoso.

Estas omisiones demuestran su total desapego a la legalidad, a la cual lo constriñe el Código de Ética de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa en su numeral 1º, al especificar que el respeto a la legalidad es la exigencia del servidor público de conducirse conforme a Derecho, debiendo desdeñar toda influencia que lo desvíe de su actuar legal.

De igual manera se violentó lo dispuesto por el apartado 4.1 “De los Agentes del Ministerio Público Investigadores”, del Manual de Organización y Procedimientos para los Agentes del Ministerio Público que a la letra dice:

“4.1.1. Actividades

4.1.1.1. Son actividades que corresponde realizar a los Agentes del Ministerio Público Investigadores:

4.1.1.1.3. Actuaciones de investigación, que comprenden las diligencias necesarias para allegarse pruebas tendientes a la comprobación de los elementos del tipo penal y la probable responsabilidad”.

En tal sentido, queda plenamente acreditada la irregularidad de parte de los representantes sociales, licenciados N3 y N4, titular y auxiliar respectivamente de la Agencia Tercera del Ministerio Público del fuero común de Mazatlán, Sinaloa, al no ordenar la práctica de las diligencias necesarias para comprobar los elementos de los tipos penales y la probable responsabilidad del indiciado al integrar averiguación previa y al no haberse ajustado en el ejercicio de su actividad persecutoria, a los preceptos constitucionales y legales que rigen la función del Ministerio Público.

Asimismo, también queda plenamente acreditada la mala actuación o representación social del licenciado N6, agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Ramo Penal de Mazatlán, Sinaloa, al no llevar a cabo de forma legal la representación del quejoso en segunda instancia al presentar un recurso de apelación sin las formalidades que la ley señala.

Con tales omisiones, los referidos servidores públicos también violentaron lo consagrado en los artículos 17, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 76 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa.

Estas actitudes demeritan el servicio profesional y responsable de un agente investigador de los delitos.

El servidor público de referencia no actuó con el deber que le es exigido, al desobedecer además las directrices del Código de Ética de la Procuraduría General de Justicia del Estado en cuanto a lo dispuesto en el capítulo I, número 1.1.1 así como en el capítulo V, número 5, 5.14 y 5.20, ya que al no integrar con pericia la averiguación previa, vulnera su obligación jurídica de respeto a los

derechos humanos y su deber moral de preservar el recto ejercicio de sus funciones.

Asimismo se incumplió con otras disposiciones, como son:

El Código de Conducta para Funcionarios Encargados de hacer cumplir la Ley, que en su artículo 1 establece:

“Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley cumplirán en todo momento los deberes que les impone la ley, sirviendo a su comunidad y protegiendo a todas las personas contra actos ilegales, en consonancia con el alto grado de responsabilidad exigido por su profesión.”

Por lo anterior, las conductas atribuidas pueden ser constitutivas de responsabilidades administrativas de conformidad con el artículo 47, fracciones I y XIX de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, así como por lo dispuesto en el artículo 71, fracciones I y II de la Ley Orgánica del Ministerio Público del Estado de Sinaloa.

Las mismas determinan respectivamente, que todo servidor público tendrá la obligación de cumplir el servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio, o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión, así como de abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de cualquier disposición legal, reglamentaria o administrativa relacionada con el servicio público y respeto a los derechos humanos.

Con base en lo anterior es pertinente se inicie el procedimiento administrativo disciplinario y de investigación por parte de la autoridad competente al interior de la Procuraduría General de Justicia del Estado, a efecto de que se dé seguimiento al asunto para que se aporten los elementos que den lugar al esclarecimiento de los hechos de la investigación sobre responsabilidad administrativa y penal.

Las omisiones del agente del Ministerio Público en cuestión derivaron en la afectación, entre otros, de los siguientes derechos del quejoso:

1. A procurarle justicia;
2. A la exigencia de reparación del daño;
3. A la compilación de probanzas recientes para el esclarecimiento del caso, entre ellas, las del estado en que se encontraba el probable responsable al cometer el ilícito;
4. A la seguridad jurídica;

5. A la legalidad.

Ante todo esto se victimizó dos veces al quejoso; primero, por ser víctima de la comisión del delito y segundo, por ser víctima del poder mal ejercido por parte de los representantes sociales que nos ocupan, al generarse con ello la denominada victimización secundaria.

El actuar antes identificado, ha provocado también contravenciones a diversos instrumentos internacionales como son, entre otros:

Las “Directrices sobre la función de los Fiscales”, en sus numerales 11 y 12, que señalan:

“11. Los fiscales desempeñarán un papel activo en el procedimiento penal, incluida la iniciación del procedimiento y, cuando así lo autorice la ley o se ajuste a la práctica local, en la investigación de delitos, la supervisión de la legalidad de esas investigaciones, la supervisión de la ejecución de fallos judiciales y el ejercicio de otras funciones como representantes del interés público.

12. Los fiscales, de conformidad con la ley, deberán cumplir sus funciones con imparcialidad, firmeza y prontitud, respetar y proteger la dignidad humana y defender los derechos humanos, contribuyendo de esa manera a asegurar el debido proceso y el buen funcionamiento del sistema de justicia penal.”

Principios todos exigidos en la Ley Orgánica del Ministerio Público y en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.

De igual forma se actuó en contra de la “Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder” adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas en su resolución 40/34, de 29 de noviembre de 1985, la cual para el caso que nos ocupa, aplica en su totalidad.

También se contravino la Ley de Protección a Víctimas del Delito para el Estado de Sinaloa, que establece en su contenido entre otras consideraciones, la obligación directa que recae en la Procuraduría General de Justicia del Estado de brindar protección y garantizar los derechos de las víctimas del delito, entre las que ineludiblemente destacan la justicia pronta, la seguridad jurídica, la legalidad, la coadyuvancia, asesoría legal, apoyos materiales, etc., que en el presente caso, se obviaron en pleno perjuicio del quejoso y del sistema de

procuración de justicia, puesto que se actuó en contra de los principios rectores de éste.

Con base en lo expuesto anteriormente, y al tener como marco el artículo 1º de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, que precisa como objetivo último en la entidad federativa la protección de la dignidad humana y la promoción de los derechos fundamentales que le son inherentes, así como al artículo 4º Bis, segundo párrafo, que afirma que los Derechos Humanos tienen eficacia directa y vinculación a todos los poderes públicos, esta Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa se permite formular a usted, señor Procurador General de Justicia del Estado, las siguientes:

V. RECOMENDACIONES

PRIMERA. Instruya a la Unidad de Contraloría Interna de esa Procuraduría General de Justicia del Estado para que al considerar los actos motivo de la queja, así como los razonamientos expuestos por esta Comisión, tramite el procedimiento correspondiente de conformidad con lo que establece la Ley Orgánica del Ministerio Público del Estado, así como la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, a fin de que se impongan las sanciones que resulten procedentes a los representantes sociales, licenciados N3 y N4, agentes del Ministerio Público del fuero común, y licenciado N6, agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Ramo Penal en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, adscritos a la Procuraduría General de Justicia del Estado.

SEGUNDA. Ordene se inicie averiguación previa en contra de los servidores públicos referidos en el párrafo que antecede, como probables responsables de los delitos que resulten y derivados de las circunstancias que se señalan en el cuerpo de la presente resolución; y desde luego, se dicte a la brevedad, la resolución que conforme a Derecho corresponda.

TERCERA. Se sirva girar sus instrucciones a quien corresponda a fin de que se realicen las acciones inmediatas para que el personal adscrito a investigar y proseguir delitos sea instruido y capacitado, respecto de las actuaciones que deban ajustarse a fin de respetar los derechos fundamentales en el desempeño de sus funciones, con relación a las integraciones de averiguaciones previas y no se incurra en irregularidades.

CUARTA. Se tomen las medidas necesarias para que se garanticen los derechos del señor N1, en su carácter de víctima del delito y, en su caso, se analice la posibilidad de que con otros datos que deberán aportarse se acredite la

presunta responsabilidad del inculpado del delito de lesiones a título culposo que sufrió el hoy quejoso, así como para la reparación del daño.

La presente recomendación, de acuerdo con lo señalado en el artículo 102, apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tiene el carácter de pública y se emite con el propósito fundamental de hacer una declaración respecto de una conducta irregular cometida por servidores públicos en el ejercicio de las facultades que expresamente les confiere la ley, como obtener la investigación que proceda por parte de las dependencias administrativas o cualquiera otra autoridades competentes para que, dentro de sus atribuciones, apliquen las sanciones conducentes y se subsane la irregularidad de que se trate.

Notifíquese al licenciado Marco Antonio Higuera Gómez, Procurador General de Justicia del Estado, la presente Recomendación la cual quedó registrada en los archivos de esta Comisión bajo el número 14/2011, debiendo remitírsele con el oficio de notificación correspondiente, una versión de la misma con firma autógrafa del infrascrito.

Que de conformidad con lo estatuido por el artículo 58 de la Ley Orgánica de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, dentro de un plazo de cinco días hábiles computable a partir del día siguiente de aquél en que se haga la notificación respectiva, manifieste a esta Comisión si acepta la presente Recomendación, solicitándosele expresamente que en caso negativo motive y fundamente debidamente la no aceptación; esto es, que exponga una a una sus contra argumentaciones de modo tal que se demuestre que los razonamientos expuestos por esta Comisión carecen de sustento, adolecen de congruencia o, por cualquiera otra razón, resulten inatendibles.

Todo lo anterior en función de la obligación de todos de observar las leyes y específicamente de su protesta de guardar la Constitución, lo mismo la General de la República que la del Estado, así como las leyes emanadas de una y de otra.

Ahora bien, en caso de aceptación de la misma, deberá entregar dentro de los cinco días siguientes, las pruebas correspondientes a su cumplimiento.

La falta de presentación de pruebas dará lugar a que se interprete que la presente Recomendación no fue aceptada, por lo que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos quedará en libertad de hacer pública precisamente esa circunstancia.

Notifíquese al señor N1, en su calidad de quejoso, la presente Recomendación, remitiéndole con el oficio respectivo un ejemplar de esta resolución con firma autógrafa del infrascrito para su conocimiento y efectos legales procedentes.

EL PRESIDENTE

DR. JUAN JOSÉ RÍOS ESTAVILLO